



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

S.J.: 136/2026

INFC: 2026/1128

Se ha recibido en el Servicio Jurídico de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, para su preceptivo informe, el **Proyecto de Orden de modificación del contrato de servicios denominado “Atención Residencial a mujeres gestantes y/o con hijo/a menor de seis años carentes de recursos económicos y/o de redes sociales de apoyo de la Comunidad de Madrid. 30 plazas”** adjudicado a favor de la compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tenemos el honor de emitir el siguiente

## INFORME

### ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero.** - Ha tenido entrada en esta Abogacía General un oficio, remitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en el que se interesa la emisión del preceptivo informe, a propósito de la modificación del contrato referenciado.

A la petición de informe se acompaña la siguiente documentación:

- Antecedentes del contrato: Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas, Orden 324/2024 de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la que se adjudica el contrato a la compañía de las Hijas

de la Caridad de San Vicente de Paúl, contrato formalizado, resguardos de la garantía, Orden 372/2026 por la que se prorroga el contrato y documento de formalización de la prórroga.

- Proyecto de Orden de modificación del contrato de servicios citado en el encabezamiento, y proyecto de cláusula de modificación.
- Memoria justificativa de la modificación del contrato de servicios, firmada por la Subdirectora General de Protección a la Infancia, actuando por delegación de firma de la Directora General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (Res. 1366/2026 de 30 de marzo).
- Trámite de audiencia de la modificación a la contratista, y acuse de recibo de la notificación telemática.
- Aceptación de la modificación por el contratista.

**Segundo.** - Mediante Orden 324/2024 de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se adjudica el contrato citado en el encabezamiento a la compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la cantidad de 1.036.016,30 euros (IVA exento). El contrato se formalizó el día 18 de marzo de 2024, con un plazo de ejecución del contrato de dos años, desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026.

Mediante Orden 372/2026 de 19 de febrero de 2026, se aprobó la primera prórroga del contrato por importe total de 518.008,15 euros (IVA exento), con un plazo de ejecución desde el día 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, ambos inclusive, el contrato se suscribió en fecha 10 de marzo de 2026.

**Tercero.-** Con fecha 28 de abril de 2026, la Directora General de Infancia Familia y Fomento de la Natalidad propone la modificación del contrato por las razones esgrimidas en la memoria justificativa de la modificación.

**Cuarto.-** Se ha concedido trámite de audiencia al adjudicatario del contrato, la compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, quien ha aceptado la modificación pretendida.

### CONSIDERACIONES JURÍDICAS

**Primera. -** La legislación de contratos de las Administraciones Públicas tradicionalmente consagra, entre las prerrogativas de la Administración en la contratación pública, la llamada *potestas variandi* o potestad de modificación del contrato; así se recoge en el artículo 190 LCSP:

"Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta".

La jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica una separación del principio básico en materia contractual de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987). Constituye un poder para adaptar los contratos a las necesidades públicas, de manera que es el interés general el que debe prevalecer en todo caso (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978).



El necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus términos y la admisibilidad de que la Administración pueda variar tales condiciones en determinadas circunstancias y por razones de interés público, llevan a admitir el citado *ius variandi* de la Administración, pero con sometimiento a determinados requisitos, para evitar la indebida alteración de los principios que rigen la licitación pública.

Así, y como ha recordado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, el sometimiento a cauces estrictos del *ius variandi* de la Administración tiene su razón de ser precisamente en la salvaguarda del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación administrativa. Se advierte igualmente que tal facultad debe ser entendida de modo restrictivo, interpretándose la Ley en la forma y sentido más rigurosos (Dictámenes de 10 de septiembre de 1998, 5 de diciembre de 1984 y 24 de julio de 2003), todo ello, por cuanto un uso indiscriminado de dicha potestad de modificación de los contratos, podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas.

**Segunda.** - El régimen jurídico de modificación de los contratos del sector público se contiene fundamentalmente en los artículos 203 y siguientes LCSP, el primero de los cuales, señala:

“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.”.

Por lo tanto, en sede de modificación contractual, la LCSP distingue en función de que dicha modificación esté prevista o no en el pliego; en el primer caso, se regirá por el artículo 204 y por el propio PCAP, mientras que en caso de que no esté prevista, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 205.

En el presente caso, se persigue modificar el contrato por una causa de modificación que se encuentra expresamente prevista en el PCAP, en concreto, su apartado 22 dispone lo siguiente:

**“22.- Modificaciones previstas del contrato: SÍ.**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se prevé la siguiente modificación del contrato:

**Ampliación del número de usuarios de la Residencia respecto al previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 30 residentes.**

**Condiciones en que podrá hacerse uso de la misma:** cuando la distribución espacial (mediante la ampliación del centro o reorganización de espacios) lo permita y exista, durante la vigencia del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, demanda pendiente de atender. Dichas plazas deberán contar con la habilitación exigida en la normativa vigente en servicios sociales.

Las modificaciones previstas afectarán al precio del contrato. No obstante, no influirán sobre las características del servicio, que continuará prestándose en idénticas condiciones a las descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En el supuesto de ser necesaria la modificación prevista, el cálculo para realizar la modificación tendrá en cuenta los costes de personal con arreglo a lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de acción e intervención social 2022-2024 y un beneficio industrial del 6%, aplicando al total resultante el porcentaje de baja que presentó el adjudicatario en su oferta

**Porcentaje máximo del precio del contrato al que la modificación pueda afectar:** 20% al alza.

Presupuesto plaza ocupada/mes de licitación, IVA excluido (1.446,57 €) por el número de plazas incrementadas, por 12 meses.”

Por su parte, el artículo 204 de la LCSP, así como los artículos 191, 153, 207, 63 establecen los requisitos a que está sujeta la modificación de los contratos.

En el supuesto analizado la causa de modificación responde a una razón de interés público, la cual aparece motivada en la memoria justificativa de la necesidad firmada por la Subdirectora General de Protección a la Infancia, actuando por delegación de firma de la Directora General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (Res. 1366/2026 de 30 de marzo), que dice así:



“En la ejecución del contrato por parte de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la natalidad se ha previsto la necesidad de incorporar dos nuevas plazas al mismo, al existir una demanda no cubierta de plazas con madres que tienen más de un hijo menor de seis años. Esta disposición de plazas resulta especialmente conveniente al interés público ya que en el momento actual existe una lista de espera de cinco madres con dos hijos a su cargo, perfil especialmente complejo de atender desde otros recursos.

Con carácter previo, la entidad adjudicataria Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Provincia España Centro ha procedido a incrementar en dos plazas de menores de cero a seis años el recurso residencial, pasando de treinta plazas a treinta y dos, al ampliar la disponibilidad de habitaciones para madres que tengan a su cargo a dos hijos de esas edades y se encuentra en disposición de ofertar dos plazas más al contrato.”

No obstante, para garantizar que concurren los requisitos previstos en la causa de modificación de la cláusula 22 debería incorporarse al expediente la documentación acreditativa de ese incremento de plazas, así como la nueva habilitación.

Esta consideración tiene carácter esencial.

Por lo demás, dicha modificación del número de plazas implica la modificación del título del contrato del PCAP y del PPT, de los apartados 1 y 24 del PCAP y de los apartados I y IV del PPT en el sentido de sustituir la capacidad del centro de 30 plazas por la de 32 plazas y el recurso de un educador infantil por el de dos educadores.

Por lo que respecta a la determinación del precio de la modificación, se ha realizado de conformidad con lo previsto en el apartado 22 de la cláusula 1 del PCAP, resultando que dicha variación no supone incremento en más del 20% del precio del contrato, suponiendo un incremento de 3,91% del precio del contrato. Dicho incremento es consecuencia de la necesidad de incorporar al contrato un educador infantil que se suma al ya existente dentro del servicio de cuidado de menores, y los gastos de alimentación y farmacia derivados de la ocupación de esas nuevas plazas.

De todo ello resulta que la modificación propuesta se ajusta a las previsiones del pliego, y a legalidad vigente.

**Cuarta.** -Desde el punto de vista procedimental, se ha seguido la tramitación prevista con carácter general para el ejercicio de las prerrogativas en materia de contratación en el artículo 191 de la LCSP, así como las especialidades contempladas en su artículo 207, habiéndose cumplimentado en particular, el trámite de audiencia a la contratista adjudicataria, que ha manifestado su aceptación a la modificación propuesta.

No es necesario el informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, al no cumplirse los presupuestos necesarios para ello de conformidad con el apartado 3.b) del precitado artículo 191. En cualquier caso, deberá atenderse a lo preceptuado en el artículo 203.3, en relación con los artículos 207 a 63, en lo concerniente a la formalización y publicidad de la modificación.

**Quinta.** – Teniendo en cuenta que el contrato ha experimentado variación en el precio como consecuencia de la causa de modificación se deberá reajustar la garantía definitiva inicialmente constituida en la cantidad 2.24,69 euros, de conformidad la Cláusula 14 del PCAP, tal como se hace constar en el Dispongo Tercero del borrador de orden de modificación.

En virtud de lo expuesto, procede emitir la siguiente

### CONCLUSIÓN

El Proyecto de Orden de modificación del contrato de servicios denominado “**Atención Residencial a mujeres gestantes y/o con hijo/a menor de seis años carentes de recursos económicos y/o de redes sociales de apoyo de la Comunidad de Madrid. 30 plazas**” merece el parecer favorable de este Servicio Jurídico sin perjuicio de la consideración realizada.



Es cuanto se tiene el honor de informar, no obstante V.I. resolverá.

Madrid, a fecha de firma

**LA LETRADA JEFE EN LA CONSEJERIA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

Firmado digitalmente por: GONZALEZ MERINO MERCEDES  
Fecha: 2026.05.14 14:20

Fdo. Mercedes González Merino

**DIVISION DE CONTRATACIÓN  
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  
CONSEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**